

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES

Convocatoria: Orden PJC/215/2024, de 20 de febrero (BOE 08 de marzo de 2024)



**Pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de turno libre, en el
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia**

Examen de incidencias

Día **26 de marzo de 2025**

ADVERTENCIAS:

1. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE.
2. Todas las preguntas del ejercicio tienen el mismo valor. Se evaluarán las 100 primeras preguntas, las 4 últimas serán de reserva.
3. El presente ejercicio se puntuará de 0 a 20 puntos. Sólo se calificarán las preguntas marcadas en la Hoja de Examen. Las preguntas acertadas se valorarán con 0,2 puntos; las preguntas no acertadas descontarán 0,066 puntos; las preguntas no contestadas no serán puntuadas.
4. Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde al número de pregunta del Cuestionario.
5. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de 120 minutos.

Este cuestionario es propiedad del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este cuestionario incluso citando la procedencia.





1.- Las Cortes Generales podrán solicitar la comparecencia del Presidente del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 563 de la LOPJ:

- a) Para responder a las preguntas que se le formulen acerca del estado, funcionamiento y actividades de la Fiscalía General del Estado y de los procedimientos en tramitación en Juzgados y Tribunales.
- b) Cuando lo soliciten tres Grupos parlamentarios y lo acuerde la Mesa del Congreso, para informar sobre los aspectos más relevantes del estado de la Justicia en España.
- c) Para responder a las preguntas que se le formulen acerca de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales, y ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para informar sobre los aspectos relevantes del estado de la Justicia en España.
- d) Cuando lo solicite el Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados al Presidente del Congreso de los Diputados, y éste así lo acuerde para informar al Congreso sobre los aspectos relevantes del estado de la Justicia en España.

2.- Los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre estatuto orgánico de los Letrados de la Administración de Justicia y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 561 de la LOPJ:

- a) No precisan informe del Consejo General del Poder Judicial.
- b) Precisan informe del Consejo General del Poder Judicial.
- c) Precisan informe previo y vinculante del Consejo General del Poder Judicial
- d) El Gobierno no está obligado a solicitar al Consejo General del Poder Judicial informe en dicha materia.

3.- El fiscal sancionado con traslado forzoso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, no podrá concursar:

- a) En el plazo de dos a cuatro años determinado en la resolución que ponga fin al procedimiento.
- b) En el plazo de seis meses a tres años determinado en la resolución que ponga fin al procedimiento.
- c) En el plazo de uno a cuatro años determinado en la resolución que ponga fin al procedimiento.
- d) En el plazo de uno a tres años determinado en la resolución que ponga fin al procedimiento.



4.- De conformidad con el artículo 11 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, los actos de comunicación de los órganos y oficinas judiciales y fiscales con las partes procesales y, en su caso, con los terceros intervinientes, se realizarán:

- a) A través de correo electrónico.
- b) A través del sistema LexNET cuando las partes intervinientes en el proceso no estén representadas por profesionales de la justicia.
- c) A través del Servicio Compartido de Gestión de Notificaciones Electrónicas y la Carpeta Ciudadana provistos por el Ministerio de Justicia.
- d) A través de la sede judicial electrónica.

5.- NO tendrán acceso directo a la información contenida en el Registro Central de Protección a las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia:

- a) Las unidades de policía especialmente encargadas del control y seguimiento de la violencia doméstica, exclusivamente en el ámbito de sus competencias de protección de víctimas de violencia doméstica o de género, a través de los funcionarios autorizados.
- b) Las delegaciones de la Administración Tributaria, exclusivamente en el ámbito de sus competencias, a través de los funcionarios autorizados.
- c) Las Comunidades Autónomas, exclusivamente en el ámbito de sus competencias de protección de las víctimas de violencia doméstica o de género, a través del responsable del punto de coordinación o, en su caso, a través de las personas designadas por dicho responsable.
- d) Las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, exclusivamente en el ámbito de sus competencias de protección de víctimas de violencia doméstica o de género.

6.- De conformidad con lo previsto el artículo 509 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, en caso de excedencia por cuidado de hijo o familiar a cargo, tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo desempeñado:

- a) Al menos un año.
- b) Al menos tres años.
- c) Al menos dos años.
- d) Al menos cuatro años.





7.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, NO conocerá del enjuiciamiento de las causas por:

- a) Delitos cometidos por el Consorte del titular de la Corona, su Sucesor o Sucesora.
- b) Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos o cualquier otro instrumento de pago distinto del efectivo, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales.
- c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.
- d) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles.

8.- Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, NO podrán conocer en el orden civil de los siguientes asuntos:

- a) Los de filiación, maternidad y paternidad.
- b) Los procedimientos de sucesión universal de la mujer víctima de violencia de género, así como los que se insten frente a sus herederos.
- c) Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción.
- d) Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.

9.- Según el artículo 40 del Instrumento de Ratificación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5, de 6 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966), los miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son elegidos

- a) Por un período de nueve años y son reelegibles.
- b) Por un período de nueve años y no son reelegibles.
- c) Por un período de seis años y son reelegibles.
- d) Por un período de seis años y no son reelegibles.



10.- Los miembros de la Comisión Europea de Derechos Humanos, según el artículo 22 del Instrumento de Ratificación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5, de 6 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966) son elegidos:

- a) Por un período de nueve años y son reelegibles.
- b) Por un período de seis años y son reelegibles.
- c) Por un período de nueve años y no son reelegibles.
- d) Por un período de seis años y no son reelegibles.

11.- El artículo 26.3 del Código de Comercio dispone que los administradores de las sociedades mercantiles deberán presentar en el Registro Mercantil, dentro de los ocho días siguientes a la aprobación del acta de la Junta General:

- a) Los libros, correspondencia, documentación y justificaciones concernientes a su negocio.
- b) Los datos relativos a la convocatoria y a la constitución del órgano.
- c) Los libros obligatorios legalizados.
- d) El testimonio notarial de los acuerdos inscribibles.

12.- El artículo 4 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital establece que, en caso de liquidación de una sociedad de responsabilidad limitada, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones sociales, ¿de qué cantidad deberán responder los socios solidariamente?

- a) Del 20 por ciento del beneficio de la sociedad.
- b) De la diferencia entre el importe de tres mil euros y la cifra del capital suscrito.
- c) De la totalidad del capital suscrito.
- d) De una tercera parte del capital suscrito.





13.- Conforme al artículo 229 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el deber de evitar situaciones de conflicto de interés obliga al administrador a abstenerse de:

- a) Ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han sido concedidas.
- b) Desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal con libertad de criterio.
- c) Desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad.
- d) Aprovecharse de las oportunidades de negocio de la sociedad.

14.- El artículo 73 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, estipula que incumbe a los liquidadores de una sociedad cooperativa:

- a) Concertar transacciones y compromisos cuando así convenga a los intereses sociales.
- b) Aprobar el proyecto de fusión
- c) Elaborar el informe de gestión y la propuesta de aplicación de los excedentes disponibles o de imputación de pérdidas.
- d) El ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los miembros del Consejo Rector.

15.- ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, conforme a su artículo 1?

- a) La regulación de los contratos de venta a plazos de bienes muebles corporales no consumibles e identificables, de los contratos de préstamo destinados a facilitar su adquisición y de las garantías que se constituyan para asegurar el cumplimiento de las obligaciones nacidas de los mismos.
- b) La regulación de los contratos de venta a plazos de bienes muebles corporales consumibles e identificables, de los contratos de préstamo destinados a facilitar su adquisición y de las garantías que se constituyan para asegurar el cumplimiento de las obligaciones nacidas de los mismos.
- c) La regulación de los contratos de venta a plazos de bienes muebles corporales no consumibles e identificables, de los contratos de préstamo destinados a facilitar su venta y de las garantías que se constituyan para asegurar el cumplimiento de las obligaciones nacidas de los mismos.
- d) La regulación de los contratos de venta a plazos de bienes muebles no corporales consumibles e identificables, de los contratos de préstamo destinados a facilitar su adquisición y de las garantías que se constituyan para asegurar el cumplimiento de las obligaciones nacidas de los mismos.



16.- Según el artículo 25 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, ¿Qué documento deberá acompañar la designación de inventor en una solicitud de patente, en el caso de que el solicitante no sea el inventor o no sea el único inventor?

- a) Una declaración jurada que exprese quién es el inventor.
- b) Una declaración en la que se exprese cómo ha adquirido el solicitante el derecho a la patente.
- c) Las informaciones que permitan identificar al inventor y contactar con él.
- d) No resulta necesario aportar ningún otro documento adicional.

17.- En virtud de lo estipulado en el artículo 26 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, ¿cuál será el plazo de duración de los derechos de explotación de la obra?

- a) 30 años desde su publicación.
- b) 15 años desde su publicación.
- c) Toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
- d) Toda la vida del autor y sesenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.

18.- Además del titular del secreto empresarial, ¿quiénes están legitimados para el ejercicio de las acciones previstas en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, conforme a su artículo 13.1?

- a) Cualquier interesado con plena capacidad para ejercer sus derechos.
- b) Todos aquellos que hayan conocido del secreto empresarial por razón de su cargo o profesión.
- c) Todos aquellos que hayan tenido conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial.
- d) Quienes acrediten haber obtenido una licencia exclusiva o no exclusiva para su explotación que les autorice expresamente dicho ejercicio.





19.- Según el artículo 10 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro ¿cuál es el plazo a partir del cual el asegurador no podrá considerar la existencia de antecedentes oncológicos a efectos de la contratación del seguro sobre la vida, quedando prohibida toda discriminación o restricción a la contratación por este motivo?:

- a) Tres años desde la finalización del tratamiento radical sin recaída posterior.
- b) Cuatro años desde la remisión completa de la enfermedad.
- c) Cinco años desde la finalización del tratamiento radical sin recaída posterior.
- d) Seis años desde la remisión completa de la enfermedad.

20.- En base a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, ¿con qué antelación deberán notificar las partes su oposición a la prórroga del contrato de seguro?

- a) Al menos un mes de anticipación a la conclusión del período del seguro en curso a partir de la segunda prórroga del contrato.
- b) Al menos dos meses de anticipación a la conclusión del período del seguro en curso cuando quien se oponga a la prórroga sea el tomador, y de tres meses cuando sea el asegurador.
- c) Dos meses de anticipación a la conclusión del período del seguro en curso, tanto en el caso del tomador como del asegurador.
- d) Al menos un mes de anticipación a la conclusión del período del seguro en curso cuando quien se oponga a la prórroga sea el tomador, y de dos meses cuando sea el asegurador.

21.- El endoso de una letra de cambio, conforme a lo dispuesto en la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque:

- a) Debe ser total, puro y simple.
- b) Puede ser total o parcial.
- c) Es nulo el endoso en blanco.
- d) El endoso sin fecha carece de eficacia.



22.- Dispone la Ley 50/1980, de 8 de octubre, reguladora del Contrato de Seguro que en el contrato de reaseguro:

- a) Las alteraciones y modificaciones de la suma asegurada, del valor del interés, y, en general, de las condiciones del seguro directo deberán comunicarse al reasegurador en el plazo máximo de 10 días.
- b) Las alteraciones y modificaciones de la suma asegurada, del valor del interés, y, en general, de las condiciones del seguro directo deberán comunicarse al reasegurador siempre por escrito y por un medio seguro que acredite de forma fehaciente la recepción.
- c) Las alteraciones y modificaciones de la suma asegurada, del valor del interés, y, en general, de las condiciones del seguro directo deberán comunicarse al reasegurador en la forma y en los plazos establecidos en el contrato.
- d) No es necesario comunicar al reasegurador las alteraciones y modificaciones de la suma asegurada, del valor del interés, y, en general, de las condiciones del seguro directo.

23.- El expediente para el nombramiento de perito en los contratos de seguro, conforme a la regulación contenida en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria:

- a) Lo deben promover las dos partes del contrato de seguro conjuntamente.
- b) Lo puede promover cualquiera de los peritos que han discrepado en la valoración de los daños.
- c) Sólo lo puede promover el asegurado no conforme con la valoración de los daños realizada por el perito del asegurador.
- d) Lo pueden promover cualquiera de las partes del contrato de seguro o ambas conjuntamente.

24.- En el expediente para la disolución judicial de sociedades según la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria:

- a) Es preceptiva la intervención de Abogado y Procurador sólo si lo promueven los socios o cualquier interesado.
- b) Es preceptiva la intervención de Abogado, pero no de Procurador si lo promueven los administradores de la sociedad.
- c) Es preceptiva la intervención de Abogado y Procurador en todo caso.
- d) No es preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador si lo promueve el representante legal de la sociedad.



25.- El expediente para la convocatoria de juntas generales regulado en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria:

- a) Sólo cabe para instar la convocatoria de juntas extraordinarias.
- b) Es posible solicitar simultáneamente la celebración de una junta ordinaria y extraordinaria y se podrá acordar que se celebren conjuntamente.
- c) Cabe para instar la convocatoria de juntas extraordinarias u ordinarias, pero en ningún caso se pueden solicitar simultáneamente.
- d) Es posible solicitar simultáneamente la celebración de una junta ordinaria y extraordinaria, pero en ningún caso se podrá acordar que se celebren conjuntamente.

26.- De acuerdo con el artículo 1.4 del Estatuto de los Trabajadores al trabajo que presten los trabajadores españoles contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero les será de aplicación:

- a) La legislación del lugar del trabajo.
- b) La legislación laboral española, sin perjuicio de las normas de orden público aplicables en el lugar del trabajo.
- c) La legislación del lugar del trabajo, sin perjuicio de las normas de orden público españolas.
- d) La legislación del lugar del trabajo y el convenio colectivo sectorial español.

27.- Según el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, con carácter general, los convenios colectivos regulados por esta ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación:

- a) Siempre que lo haya ratificado el comité de empresa
- b) Sí, siempre que esté vigente.
- c) Solo obliga a las empresas
- d) Obliga a los empresarios, pero los trabajadores pueden acogerse al convenio facultativamente.

28.- De acuerdo con el artículo 8.3 del Estatuto de los Trabajadores, de qué plazo dispone el empresario para comunicar a la oficina pública de empleo las prórrogas de los contratos que celebre:

- a) Diez días.
- b) Las prórrogas no se tienen que comunicar.
- c) Cinco días.
- d) Las prórrogas se tienen que comunicar en el plazo de diez días a la Inspección de Trabajo, pero no a la oficina pública de empleo.

29.- De acuerdo con el artículo 16.1, del Estatuto de los Trabajadores, el contrato fijo-discontinuo podrá concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contrata:

- a) Exclusivamente mercantiles.
- b) Exclusivamente civiles.
- c) Exclusivamente administrativas.
- d) Mercantiles o administrativas.

30.- Dispone el artículo 33.3 del Estatuto de los Trabajadores, que, en los casos de procedimientos concursales, desde que se conozca que hay créditos laborales, el juez:

- a) Podrá citar, si lo solicitan las partes, a la Inspección de Trabajo.
- b) Citará de oficio o a instancia de parte a la Inspección de Trabajo.
- c) Citará al Fondo de Garantía Salarial únicamente cuando lo solicite alguna de las partes.
- d) Citará, de oficio o a instancia de parte, al Fondo de Garantía Salarial.

31.- De acuerdo con el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, en defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año, ¿qué tanto por ciento de la jornada laboral?:

- a) Cinco por ciento.
- b) Cincuenta por ciento.
- c) Veinte por ciento.
- d) Diez por ciento.

32.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 del Estatuto de los Trabajadores, en las empresas con menos de veinticinco trabajadores para los trabajadores que no sean técnicos titulados, el periodo de prueba no podrá exceder de:

- a) Un mes.
- b) Tres meses.
- c) Quince días.
- d) El tiempo que fije el convenio, no pudiendo ser inferior a tres meses.





33.- Según el artículo 29.1 del Estatuto de los Trabajadores, la liquidación y pago del salario se harán en el lugar:

- a) Convenido o conforme a los usos y costumbres.
- b) Que se determine en los convenios colectivos.
- c) Del centro de trabajo.
- d) Donde radique la sede social de la empresa.

34.- De acuerdo con el artículo 4.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, las cuestiones previas y prejudiciales serán decididas por medio de:

- a) Providencia dictada por el Juez en el plazo de los cinco días anteriores a dictar sentencia.
- b) Decreto del Letrado de la Administración de Justicia.
- c) Auto dictado al efecto.
- d) La resolución que ponga fin al proceso.

35.- Según el artículo 194 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el recurso de suplicación debe anunciarse en el plazo de:

- a) En el recurso de suplicación no existe el trámite del anuncio.
- b) Diez siguientes a la notificación de la sentencia.
- c) Cinco días siguientes a la notificación de la sentencia.
- d) Tres días siguientes a la notificación de la sentencia

36.- De acuerdo con el artículo 83.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se podrán suspender los actos de conciliación y juicio:

- a) Por el Juez mediando causa justificada.
- b) Solo por causa de fuerza mayor.
- c) Por el Letrado de la Administración de Justicia a petición de ambas partes o por motivos justificados.
- d) Por el Juez discrecionalmente, debiendo señalar de nuevo en el plazo improrrogable de un mes



37.- Conforme al artículo 239 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con la ejecución de sentencias firmes, señale la respuesta que NO es correcta:

- a) Iniciada la ejecución, la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones necesarias.
- b) No será de aplicación el plazo de espera para la ejecución de la Resolución previsto en el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- c) La ejecución de las sentencias firmes se iniciará a instancia de parte, salvo los supuestos de ejecución iniciada de oficio.
- d) En ningún caso cabe que se decrete la inejecución de una sentencia u otro título ejecutivo.

38.- El trabajador que ocupare vivienda por razón del trabajo, tras declararse la extinción del contrato de trabajo por resolución firme, conforme al artículo 285 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social:

- a) Puede mantenerse en la vivienda *sine die*, ya que es un derecho fundamental.
- b) Queda obligado a abandonar la vivienda en el plazo de una semana, si se le requiere por el empresario, prorrogable por un mes por el Letrado de la Administración de Justicia, si existe motivo fundado.
- c) Tiene un derecho de permanencia en la vivienda por el mismo tiempo de duración de su antiguo contrato de trabajo.
- d) Deberá abandonar la vivienda en el plazo de un mes, prorrogable por dos meses más por el Letrado de la Administración de Justicia, si existe motivo fundado.

39.- La revisión de oficio del artículo 106 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permite a las Administraciones Públicas:

- a) En el plazo de un mes desde que se dictó el acto, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, si concurre en los mismos causa de anulabilidad.
- b) En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, si concurre en los mismos causa de nulidad.
- c) En el plazo de un mes desde que se dictó el acto, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, si concurre en los mismos causa de nulidad.
- d) En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, si concurre en los mismos causa de anulabilidad.





40.- Conforme al artículo 56 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en cuanto a la subsanación de las faltas de que adolezca la demanda, señale la respuesta CORRECTA:

- a) En el plazo de diez días el Juez resolverá si procede practicar requerimiento de subsanación.
- b) El Letrado de la Administración de Justicia examinará de oficio la demanda y tras su admisión se requerirá la subsanación, a petición de la Administración demandada.
- c) No cabrá requerimiento de subsanación una vez transcurrido el plazo de diez días.
- d) El Letrado de la Administración de Justicia examinará de oficio la demanda y requerirá que se subsanen las faltas de que adolezca, tras cuya subsanación admitirá la demanda.

41.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales:

- a) Desde el día en que sea publicado el fallo, aun cuando los preceptos anulados no se publiquen sino hasta su subsanación.
- b) Desde que se notifique al demandante el fallo mediante comunicación electrónica.
- c) Desde el día siguiente a que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada.
- d) Desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada.

42.- Conforme al artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, en todo caso:

- a) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.
- b) Aquellos actos que, por su relevancia, deban ser motivados según la decisión discrecional de la Administración.
- c) Los actos que admitan pruebas propuestas por los interesados.
- d) Los acuerdos que se dicten en el ejercicio de potestades regladas, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.



43.- De conformidad con el artículo 109 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, podrán promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución:

- a) Sólo la parte actora.
- b) Sólo la Administración pública, cuando sea parte demandada.
- c) Sólo la Administración pública y las demás partes procesales.
- d) Sólo la Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo.

44.- De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el Letrado de la Administración de Justicia, luego que sea firme la sentencia lo comunicará al órgano previamente identificado como responsable de su cumplimiento, a fin de que, recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, en el plazo de:

- a) Veinte días.
- b) Treinta días.
- c) Diez días.
- d) Quince días.

45.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el Letrado de la Administración de Justicia inadmitirá mediante decreto, directamente recurrible en revisión, el recurso de reposición interpuesto contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos:

- a) Cuando el recurso de reposición haya sido interpuesto fuera del plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución impugnada.
- b) Cuando el recurso de reposición resulte totalmente infundado. En los demás casos no cabe la inadmisión directa mediante Decreto.
- c) Cuando el recurso de reposición haya sido interpuesto fuera del plazo de tres días a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución impugnada.
- d) Cuando el recurso de reposición haya sido interpuesto fuera del plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución impugnada.





46.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos de naturaleza sancionadora:

- a) Nunca se iniciarán de oficio.
- b) Se iniciarán de oficio o a instancia de parte.
- c) Se iniciarán de oficio o a instancia de parte, así como de cualquier órgano que pudiera tener conocimiento del hecho infractor.
- d) Se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente.

47.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas:

- a) Son anulables siempre que hayan sido dictados fuera del tiempo establecido.
- b) Son nulos si incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
- c) Son anulables los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
- d) Son nulos, en todo caso, los que incurran en desviación de poder.

48.- De acuerdo con la Constitución, el Estado NO tiene competencia exclusiva sobre la materia de:

- a) Bases de régimen minero y energético.
- b) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
- c) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- d) Legislación sobre productos farmacéuticos.

49.- Indique la opción correcta. Los Decretos legislativos:

- a) Tienen el mismo rango que los Reglamentos y, si versan sobre materias de auto organización administrativa, pueden revestir la forma de Orden Ministerial.
- b) Son normas que indican su máximo rango reglamentario dictadas por el Consejo de Ministros en desarrollo de una norma con rango de Ley que así lo prevé.
- c) Son normas con rango de Ley dictadas por el Gobierno en virtud de una delegación expresa de las Cortes.
- d) Son normas que puede elaborar la Diputación Permanente del Congreso de Diputados cuando se han disuelto las Cámaras y que podrá hacer siempre que existan razones de urgencia.



50.- Es fundamento del orden político y de la paz social:

- a) La dignidad de las Instituciones.
- b) Los derechos consuetudinarios y la costumbre.
- c) El respeto a los derechos forales.
- d) El libre desarrollo de la personalidad.

51.- Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I de la Constitución vinculan:

- a) A todos los españoles.
- b) A todos los ciudadanos.
- c) A todos los poderes públicos.
- d) A todos los ciudadanos y a la Administración.

52.- Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de:

- a) La maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
- b) La maternidad, la paternidad, las obligaciones conyugales y el estado civil de las personas.
- c) La maternidad, la paternidad, las obligaciones familiares y el estado civil.
- d) La paternidad y el estado civil.

53.- Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, se define como:

- a) Agresión sexual.
- b) Acoso sexual.
- c) Violencia sexual.
- d) Abuso sexual.





54.- Según la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿cuál es el principio técnico por el que NO se rige el portal de transparencia?:

- a) Accesibilidad.
- b) Interoperabilidad.
- c) Eficiencia.
- d) Reutilización.

55.- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública deberá notificarse en el plazo de:

- a) Diez días, plazo que podrá ampliarse por otros diez días en caso de que el volumen o complejidad así lo hagan necesario.
- b) Quince días, plazo que podrá ampliarse por otros quince días en caso de que el volumen o complejidad así lo hagan necesario.
- c) Veinte días, plazo que podrá ampliarse por otros veinte días en caso de que el volumen o complejidad así lo hagan necesario.
- d) Un mes, plazo que podrá ampliarse por otro mes en caso de que el volumen o complejidad así lo hagan necesario.

56.- La programación y ejecución del gasto público responderá a los criterios de:

- a) Eficacia y economía.
- b) Eficiencia y economía.
- c) Eficiencia y eficacia.
- d) Eficiencia, productividad y economía.

57.- La representación pública y la defensa de la legalidad en el recurso contencioso electoral corresponde:

- a) Al Defensor del Pueblo.
- b) A los partidos políticos.
- c) Al Ministerio Fiscal.
- d) A la Junta Electoral Central.





58.- ¿Cuándo puede plantearse la cuestión de inconstitucionalidad?

- a) Una vez que ya ha sido dictada la sentencia.
- b) Durante la instrucción del proceso.
- c) Durante la instrucción y siempre antes de la conclusión del procedimiento.
- d) Dentro del plazo para dictar sentencia.

59.- En relación al control de constitucionalidad de los tratados internacionales regulado en el art. 78 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, marca la respuesta CORRECTA:

- a) La facultad para exigir al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la existencia o no de contradicción entre la Constitución y un Tratado Internacional ratificado por el Estado corresponde al Consejo de Ministros.
- b) La facultad de requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la existencia o no de contradicción entre la Constitución y un Tratado Internacional ratificado por el Estado corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado.
- c) El Tribunal Constitucional, previa admisión a trámite de la solicitud de pronunciamiento sobre la existencia o no de contradicción entre la Constitución y un Tratado internacional, dará traslado al solicitante y a los órganos legitimados para que expresen de manera fundada su opinión en el plazo de dos meses.
- d) El Tribunal Constitucional, previa admisión a trámite de la solicitud de pronunciamiento sobre la existencia o no de contradicción entre la Constitución y un Tratado internacional, dará traslado al solicitante y a los órganos legitimados para que expresen de manera fundada su opinión en el plazo de tres meses.

60.- El mandato de los miembros que componen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tendrá una duración de:

- a) Seis años.
- b) Cinco años.
- c) Tres años renovables.
- d) Seis años sin posibilidad de renovación.

61.- El Consejo de la Unión está compuesto por:

- a) Los jefes de Estado de cada uno de los Estados miembros.
- b) Los jefes de Estado de los Estados miembros de al menos 25 países miembros.
- c) Dos representantes de cada Estado miembro con cargo ministerial.
- d) Un representante de cada Estado miembro con cargo ministerial.



62.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, cuál de los siguientes datos NO tiene publicidad restringida en el Registro Civil:

- a) La filiación adoptiva.
- b) La nacionalidad.
- c) La discapacidad.
- d) El matrimonio secreto.

63.- Respecto a las normas de Derecho Internacional privado aplicables al Registro Civil, conforme a la Ley 20/2011, de 21 de julio, marque la respuesta correcta:

- a) Una certificación de asiento extendido en Registro extranjero no es título bastante para la inscripción en el Registro Civil español.
- b) Un documento extranjero extrajudicial no es título bastante para la inscripción en el Registro Civil español.
- c) Un documento no redactado en una de las lenguas oficiales españolas debe acompañarse de traducción oficial, excepto si al Encargado le constare el contenido del documento.
- d) Una resolución extranjera de jurisdicción voluntaria no puede inscribirse en el Registro Civil español.

64.- Conforme al artículo 22 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, son funciones de las Oficinas Generales del Registro Civil:

- a) Practicar las inscripciones que se deriven de resoluciones dictadas por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, referidas a hechos o actos susceptibles de inscripción en el Registro Civil.
- b) Implantar y elaborar programas de calidad del servicio público que presta el Registro Civil.
- c) Expedir los certificados de capacidad necesarios para la celebración de matrimonio en el extranjero, cuando al menos la inscripción de nacimiento de uno de los contrayentes conste practicada en ella.
- d) Tramitar y resolver los expedientes de Registro Civil que les atribuya el ordenamiento jurídico.



65.- Es inscribible en la oficina de Registro Civil competente el matrimonio celebrado en la forma religiosa prevista en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil:

- a) Sin sujeción a plazo alguno.
- b) En el plazo de setenta y dos horas desde su celebración.
- c) No es necesaria la inscripción para que el matrimonio celebrado en esta forma goce de pleno reconocimiento de efectos civiles.
- d) En el plazo de treinta días desde su celebración.

66.- Respecto a la rectificación de la mención registral relativa al sexo:

- a) Requiere previa resolución judicial.
- b) Es reversible transcurridos tres meses desde su inscripción.
- c) Es reversible transcurridos seis meses desde su inscripción.
- d) Es irreversible.

67.- A tenor de lo establecido en el artículo 30 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, sobre el control de legalidad de los documentos aportados al Registro Civil:

- a) El Encargado de la Oficina del Registro Civil ante el que se solicita la inscripción deberá controlar únicamente la legalidad de las formas extrínsecas del documento.
- b) El Encargado de la Oficina del Registro Civil ante el que se solicita la inscripción deberá controlar la legalidad de las formas extrínsecas del documento, la validez de los actos y la realidad de los hechos contenidos en éste.
- c) Si se trata de sentencias y resoluciones judiciales no cabe control de legalidad por el Encargado del Registro Civil siempre que se hayan aportado mediante testimonio en forma.
- d) Si el Encargado de la Oficina del Registro Civil tuviere fundadas dudas sobre la legalidad de los documentos aportados, dará cuenta inmediatamente al Ministerio Fiscal.





68.- El principio de legalidad en el Derecho Penal, hace referencia a:

- a) Que ningún comportamiento pueda ser considerado como delictivo, ni pueda imponerse a su autor pena alguna en virtud del mismo, si una ley no lo ha dispuesto así con precisión y con anterioridad a su realización.
- b) La limitación material de castigar dos veces al mismo sujeto por el mismo hecho y por la misma razón.
- c) Que el injusto no depende tanto del hecho cometido, sino de las características propias de quien lo ha llevado a cabo.
- d) Que ningún comportamiento pueda considerarse como no delictivo, salvo que expresamente venga así delimitado en el Reglamento que desarrolla dicho principio.

69.- ¿En qué artículo del Código Penal, a efectos de determinar la ley penal aplicable, se recoge el momento en que se consideran cometidos los delitos?

- a) Artículo 10.1 del Código Penal.
- b) Artículo 7 del Código Penal.
- c) Artículo 6 del Código Penal.
- d) Artículo 9 del Código Penal.

70.- ¿Cuál de las siguientes respuestas corresponde al error de prohibición contenido en el artículo 14.3 del Código Penal?:

- a) El error de prohibición tiene siempre la consideración de invencible, con independencia de las circunstancias del hecho y las personales del autor.
- b) El error de prohibición vencible sobre un hecho constitutivo de infracción penal excluye la responsabilidad penal.
- c) El error vencible o invencible, indiferentemente de un tipo u otro, tendrá siempre la consideración de atenuante de la responsabilidad penal.
- d) El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.



71.- El artículo 23 de nuestro Código Penal contempla:

- a) La circunstancia modificativa de la responsabilidad penal que actúa siempre como eximente en cualquier tipo de delito, ya sea cometido dolosamente o de forma imprudente, si el agraviado es o ha sido cónyuge o persona que esté o haya estado ligado de forma estable por análoga relación de afectividad.
- b) La circunstancia mixta de parentesco, que atenúa siempre la responsabilidad penal, por ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente.
- c) La circunstancia mixta de parentesco, que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, por ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente.
- d) La circunstancia mixta de parentesco, que produce siempre la agravación de la responsabilidad del sujeto activo por razones sociales, cuando la persona responsable de la acción u omisión sea cónyuge, hermano, ascendiente o descendiente del agraviado.

72.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta, con arreglo al artículo 8.2 del Código Penal:

- a) El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible.
- b) Los hechos susceptibles de ser calificados como negligentes se castigarán siempre como infracciones imposibles.
- c) El precepto subsidiario se aplicará siempre y en todos los supuestos, y no sólo en defecto del principal.
- d) El precepto general se aplicará con preferencia al especial.

73.- El artículo 11 del Código Penal, equipara la omisión a la acción:

- a) Cuando no existiendo una específica obligación legal o contractual de actuar, el sujeto se atribuya por sí mismo dicha obligación moral, en el contexto siempre de un delito contra el patrimonio.
- b) Siempre y cuando la producción de un resultado esté directamente vinculada a la relación de parentesco entre los sujetos.
- c) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar o cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.
- d) Cuando dicha omisión no produzca resultado alguno contra el bien jurídico protegido, pero de las aptitudes de dicho sujeto se considere su obligación de actuar en todo momento.



74.- El artículo 33 de nuestro Código Penal, clasifica las penas:

- a) En función de su naturaleza y duración, en muy graves, graves y menos graves.
- b) En función de su naturaleza y duración, en graves, menos graves y leves.
- c) En función de su naturaleza y duración, en prisión, privativas de derechos y multa.
- d) En función de su naturaleza y duración, en privativas de libertad y privativas de derechos.

75.- La prohibición de aproximarse a la víctima que determina un Juez:

- a) Impide al penado acercarse, exclusivamente, al domicilio de la víctima, pero no así a cualquier otro lugar en que ésta se encuentre, dado que la orden sólo afecta al domicilio y siempre que hubiere sido común.
- b) Impide al penado contactar con la víctima a través de medios telemáticos o informáticos, si bien las comunicaciones telefónicas entre ellos, respecto a los hijos que hubiere comunes podrán seguir realizándose, así como aquellas comunicaciones que se produzcan relativas a cuestiones de bienes cuya titularidad compartan.
- c) Impide al penado no sólo acercarse a la víctima, sino que se incluye siempre la protección a la familia extensa de ésta, alcanzando por tanto la prohibición de aproximación a familiares, incluyendo los hijos, aunque no fueren comunes, si bien no afecta a las comunicaciones que pudieran producirse entre sí.
- d) Impide al penado acercarse a la víctima, en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por la misma, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena.

76.- La Oficina de Recuperación y Gestión de activos:

- a) Es un órgano de la Administración General del Estado, cuya función es auxiliar a todos los operadores jurídicos de un procedimiento en la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y en el de los delitos económicos más graves, aunque a instancia de la propia Oficina, previa autorización judicial, puede gestionar bienes en todo tipo de delitos.
- b) Es un órgano de la Administración General del Estado cuya función es auxiliar a los órganos judiciales y fiscalías en la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y en el de los delitos económicos más graves, aunque a instancia de la propia Oficina, previa autorización judicial, puede gestionar bienes en todo tipo de delitos.
- c) Es un órgano de la Administración General del Estado, dependiente jerárquicamente del C.G.P.J. y que da, exclusivamente, auxilio a los órganos judiciales en aras a la localización de bienes de las personas que aparezcan investigadas en cualquier ilícito penal, con el objetivo de privar a las mismas de medios económicos forzando así su asunción de responsabilidad penal.
- d) Es un órgano de la Administración General del Estado que actúa a instancia de todos los órdenes jurisdiccionales, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, instituciones públicas o privadas, y/o de particulares.

77.- La tentativa viene definida:

- a) En el artículo 16.1 Código Penal, que indica que hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor.
- b) En el artículo 18.2 del Código Penal, que indica que hay tentativa cuando el sujeto activo ejecuta el acto ilícito, si bien por causas intrínsecas al sujeto pasivo éste no concluye satisfactoriamente.
- c) Por la jurisprudencia, al no contemplarse una definición de la misma en nuestro Código Penal.
- d) En el artículo 10 del Código Penal, que indica que existe tentativa cuando se produce la ideación por parte del sujeto activo de una situación contemplada en el Código Penal, lo que implica un deseo de quebrantar las normas jurídicas existentes”.

78.- Conforme al artículo 33.6 del Código Penal, las penas accesorias:

- a) Tendrán la duración máxima de cinco años, minorando de su cómputo, el tiempo de duración de la instrucción.
- b) Tendrán la duración que respectivamente tenga la pena principal, excepto lo que dispongan expresamente otros preceptos del Código Penal.
- c) Tendrán la duración máxima, siempre, de dos años.
- d) Tendrán la duración mínima, siempre, de cinco años.

79.- Conforme al artículo 267 del Código Penal, para que sean delictivos los daños causados por imprudencia, será necesario que la cuantía de los mismos sea superior a:

- a) 100.000 euros.
- b) 120.000 euros.
- c) 50.000 euros.
- d) 80.000 euros.

80.- Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando concorra alguna de las circunstancias siguientes:

- a) Obrar con abuso de confianza.
- b) Nocturnidad.
- c) Mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias del lugar tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente.
- d) Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda.



81.- Es reo de asesinato, conforme al artículo 139 del Código Penal, el que matare a otro concurriendo alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Ejecutar el hecho mediante incendio, veneno o explosivo.
- b) Obrar con abuso de superioridad.
- c) Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.
- d) Premeditación conocida.

82.- Según el artículo 140 del Código Penal, el asesinato será castigado con la pena de prisión permanente revisable cuando:

- a) El delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal.
- b) Concurran más de una de las circunstancias previstas en el artículo 139 del Código Penal.
- c) Se aumente deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.
- d) Se ejecute el hecho mediante precio, recompensa o promesa.

83.- De conformidad con el artículo 234.3 del Código Penal la pena leve de multa de uno a tres meses se impondrá en su mitad superior al que con ánimo de lucro tomare las cosas muebles ajenas si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros:

- a) Cuando en la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado por cualquier medio los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas.
- b) Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, se cometan en explotación agraria o ganadera y se cause un perjuicio grave a la misma.
- c) Cuando se utilice a menores de 16 años para la comisión del delito.
- d) Cuando las cosas sean de valor artístico, histórico, cultural o científico.

84.- Para que exista un delito de abandono de familia en la modalidad de impago de pensiones, del artículo 227 del Código Penal, es necesario que el obligado al pago deje de pagar la pensión durante:

- a) Seis meses consecutivos.
- b) Un año.
- c) Dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos.
- d) Tres meses consecutivos o seis meses no consecutivos.



85.- En el artículo 264.2 del Código Penal se impone la pena de 2 a 5 años de prisión y multa del tanto al décuplo del perjuicio causado al que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrarse, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos cuando concorra alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Se hubiera cometido por un profesional informático.
- b) Se hubiera cometido por funcionario público.
- c) Se hubiera cometido por precio.
- d) Se hubiera cometido en el marco de una organización criminal.

86.- Cuál de las siguientes circunstancias agrava la pena en el delito de lesiones conforme al artículo 148 del Código Penal:

- a) Cuando los hechos se cometan en estado de embriaguez.
- b) Cuando hubiese mediado abuso de superioridad.
- c) Cuando la víctima fuere menor de 14 años o persona con discapacidad necesitada de especial protección.
- d) Cuando los hechos hayan sido cometidos conjuntamente por dos o más personas.

87.- Conforme al artículo 96 del Código Penal, ¿cuál de las siguientes se considera una medida de seguridad privativa de libertad?

- a) La libertad vigilada.
- b) La custodia familiar.
- c) El internamiento en centro de deshabitación.
- d) La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España.

88.- El plazo de suspensión de la ejecución de las penas leves es:

- a) De uno a dos años.
- b) Las penas leves no se pueden suspender.
- c) De tres meses a un año.
- d) De seis meses a un año.





89.- El plazo de prescripción para los delitos que tengan señalada como pena máxima la de prisión de quince o más años es:

- a) Veinte años.
- b) Quince años.
- c) Diez años.
- d) Treinta años.

90.- De conformidad con el artículo 136 del Código Penal, los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos:

- a) Un año para las penas menos graves inferiores a dos años.
- b) Un año para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.
- c) Seis meses para las penas leves.
- d) Doce meses para las penas graves.

91.- Con respecto al delito de cohecho establecido en los artículos 419 y siguientes del Código Penal:

- a) Solo puede cometerlo un funcionario público.
- b) Implica únicamente recibir o solicitar, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptar ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo.
- c) Implica, entre otros, recibir o solicitar, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptar ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo contrario a los deberes inherentes al mismo.
- d) Solo se castiga si se demuestra daño económico a la Administración Pública.



92.- Conforme al artículo 305 del Código Penal, se considerará regularizada la situación tributaria:

- a) Cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, una vez que la Administración Tributaria le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación.
- b) Cuando se haya procedido por el obligado tributario al reconocimiento y pago de, al menos, el 50% de la deuda tributaria, antes que la Administración Tributaria le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación.
- c) Cuando se haya procedido por el obligado tributario al reconocimiento y pago de la deuda tributaria después de interponer denuncia o querrela por el Ministerio Fiscal, Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate.
- d) Cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

93.- Cometerán delito contra el patrimonio histórico:

- a) Los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor histórico o cultural.
- b) Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental.
- c) La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial.
- d) El que por imprudencia grave cause daños, en cuantía inferior a 400 euros, en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, así como en yacimientos arqueológicos.

94.- Cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, será castigado con la pena:

- a) De multa de doce a veinticuatro meses y, en su caso, de suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses a tres años.
- b) De prisión de seis meses a dos años y, en su caso, con la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio, empleo o cargo público, de seis a doce años,
- c) De multa de seis a doce meses y, en su caso, de suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses a tres años.
- d) De prisión de seis meses a dos años y, en su caso, de suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio seis a doce años.



95.- Conforme al artículo 485 del Código penal, será castigado con la pena de prisión permanente revisable:

- a) El que atentare contra cualquiera de los ascendientes o descendientes del Rey o de la Reina, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia.
- b) El que atentare contra el Rey o a la Reina o al Príncipe o a la Princesa de Asturias.
- c) El que matare a cualquiera de los ascendientes o descendientes del Rey o de la Reina, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia.
- d) El que matare al Rey o a la Reina o al Príncipe o a la Princesa de Asturias.

96.- Conforme al artículo 573 del Código Penal, se entenderá que se comete delito de terrorismo cuando la comisión de los delitos que en él se describen tenga por finalidad:

- a) Atentar gravemente contra los recursos naturales o el medio ambiente.
- b) Provocar el estado de excepción en la población o en una parte de ella.
- c) Desestabilizar, aun levemente, el funcionamiento de las instituciones políticas.
- d) Desestabilizar gravemente el funcionamiento de las estructuras sociales del Estado.

97.- Conforme a la Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, el acusador particular personado en la causa podrá:

- a) Participar en la práctica de las pruebas solo en la fase de audiencia.
- b) Proponer prueba en lo referente a la situación psicológica, educativa, familiar y social del menor que sean necesarias para la causa.
- c) Participar en las vistas o audiencias que se celebren.
- d) Participar, únicamente, en el incidente del expediente de solicitud de responsabilidad civil derivado de los delitos cometidos por los menores de edad penal.

98.- NO supone quebrantamiento de condena conforme al artículo 468 del Código Penal:

- a) Incumplir la prohibición de aproximarse a la víctima.
- b) Incumplir la obligación de pago de la pensión de alimentos impuesta en sentencia.
- c) Incumplir una condena impuesta, una medida cautelar o medida de seguridad.
- d) Comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez.



99.- Comete un delito contra la seguridad vial:

- a) El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor sin contar con el seguro de responsabilidad civil en vigor.
- b) El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con manifiesto desprecio por la vida de los demás.
- c) El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en cincuenta kilómetros por hora en vía interurbana.
- d) El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin contar con los dispositivos de seguridad dispuestos reglamentariamente.

100.- Los pagos que se efectúen por el penado por uno o varios delitos contra la salud pública, conforme al artículo 378 del Código Penal, se imputarán, en primer lugar:

- a) A las costas procesales.
- b) A la multa impuesta en la condena.
- c) A la indemnización del Estado por el importe de los gastos que se hayan hecho por su cuenta en la causa.
- d) A la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios.

PREGUNTAS RESERVA

101.- Según el artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ¿cuál de las siguientes circunstancias puede dar lugar a la suspensión de un juez o magistrado?

- a) Cuando por cualquier delito doloso se hubiere dictado contra ellos auto de prisión, de libertad bajo fianza o de procesamiento.
- b) En todo caso, cuando estuvieren en incapacidad temporal durante más de tres meses como consecuencia de haber sido denunciados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
- c) Cuando incurran en retraso injustificado en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
- d) Por incumplimiento de las normas deontológicas del Consejo General del Poder Judicial.



102.- ¿Cada cuánto tiempo deberá reunirse el Consejo de Administración en base a lo previsto en el artículo 245 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital?

- a) Al menos, dos veces al año.
- b) Al menos, una vez al mes.
- c) Al menos, una vez al trimestre.
- d) Al menos, una vez al año.

103.- De conformidad con el artículo 8.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, sobre las reclamaciones en materia de libertad sindical frente a actuaciones de las Administraciones Públicas referidas exclusivamente al personal laboral, que extiendan sus efectos al ámbito de una Comunidad Autónoma, conocerá:

- a) En única instancia, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
- b) En primera instancia, el Juzgado de lo Social competente.
- c) El orden social no tiene competencia para conocer de estas cuestiones litigiosas, corresponde al orden contencioso administrativo.
- d) En única instancia, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

104.- Desde la óptica jurídica, se entiende como delito imposible:

- a) Aquella acción que se desarrolla en todos sus términos, y que finalmente produce un resultado distinto al ideado por el sujeto activo.
- b) Aquella acción que se encuentra configurada como reprochable exclusivamente dentro del derecho administrativo y sancionada por éste, pero no por el Código Penal.
- c) Aquel delito que no se produce por emplearse medios inidóneos o por carencia de objeto o sujeto pasivo.
- d) Aquella acción realizada por un sujeto en el que se dan las cualidades necesarias para eximirle de responsabilidad penal.

